

**DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA
POBLACIÓN CIVIL COMO CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO**
Sistema de Alertas Tempranas – SAT

NOTA DE SEGUIMIENTO N° 034-08
Primera Nota al Informe de Riesgo N° 027-07 A.I.
Del 14 de octubre de 2007

Fecha: 10 de octubre de 2008

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO

Departamento	Municipio o Distrito	Zona Urbana		Zona Rural		Territorio Étnico	
		Cabecera, Localidad o Zona	Comuna Barrio	Corregimiento	Vereda	Resguardo	Territorios Colectivos.
META	Mapiripán	Mapiripán		Puerto Alvira, El Mielón, Sardinata, La Cooperativa, Guacamayas, El Siare	Esteros Altos, Esteros Bajos, Caño Evaristo, Caño Minas, Remolinos, El Trín, Cachivera, La Realidad, La Esmeralda, Caño Jabón, Costa Rica, Barranco Ceiba, Yamú, Mitare, Maretas, Chaparral, Silencio, El Olvido, El Progreso, La Libertad, Santa Helena, El Danubio, San Antonio, Caño Siare, Palmarito, La Rompida, Mata Bambú, Charco Caimán, Merecure, Canapure, Jungla, La Virgen, El Tigre, El Delirio, San Jorge, El Aguila, Bonanza,	Charco Caimán, Mocuare, Caño Jabón, Betania	
	Puerto Concordia	Puerto Concordia			Lindenal, El Trincho, Tienda Nueva, Guarupayas, Pororio, Palmar, Primavera, Alto Cafre, La Unión, El Tesoro, Paraíso, Caño Marimba, Porvenir, El Dorado.	Caño La Sal	

Departamento	Municipio o Distrito	Zona Urbana		Zona Rural		Territorio Étnico	
		Cabecera, Localidad o Zona	Comuna Barrio	Corregimiento	Vereda	Resguardo	Territorios Colectivos.
GUAVIARE	San José del Guaviare	San José del Guaviare		El Capricho, Charras	Caño Dorado, El Refugio, Triunfo, La Carpa, Dorado, El Capricho, Las Orquideas, El Cristal, Las Colinas, caño Lajas, Tortugas, Caño Pescado, El Chuapal, El Rosal, Picaloio, El Paraíso, Caño Flauta, Caño Tigre, Manantiales, La Rompida, Sabanas de la Fuga, El Edén, Campo Alegre, Las Dunas, El Boquerón, Manglares, Caño Blanco, Bocas de la Fuga, El Horizonte, San Luis, San Luis de los Aires, Los Gualandayes, El Morro, Nare, Puerto Nare, Charras, Dunas del Nare, Caño Makú, Guanapalo, Charrasquera, Caño Negro, Guayabales, Caño Guamido, Caño Cumare, Unión de Buenos Aires, Pipiral, La Liberia, Caño Danta, Mocuare, Araguato, Trapiche Bajo, El Palmar, Agua Bonita, Bocas de Agua Bonita, Santa Rita, El Recreo, Bajo Barrancón	Nukak Makú, Caño Negro, Barrancón, La Fuga, Barranco Ceiba, Laguna Araguato, Barranco Colorado, Guayaberos de La Maria, Cachiveras del Nare, Coro Coro, El Refugio	

VALORACIÓN DEL CIAT

FECHA DE REUNIÓN DEL CIAT	VALORACIÓN DEL INFORME DE RIESGO
9 de noviembre de 2007	Alerta Temprana
15 de julio de 2008 (reunión <i>descentralizada</i> del CIAT en Granada – Meta)	Se mantiene la Alerta Temprana por tres meses a partir de esta fecha

RECOMENDACIONES DEL SAT EN IR N° 027-07 A.I.

Previo estudio del presente Informe, se solicita al CIAT orientar la adopción de medidas que permitan conjurar, mitigar o controlar la situación de riesgo descrita, con el fin de proteger la población civil y brindar la atención humanitaria si así fuese el caso. En especial consideramos necesario recomendar:

1. A la Fuerza Pública adoptar medidas eficaces de control para prevenir una eventual incursión o ataque armado con efectos indiscriminados por parte de estructuras de las FARC que atente contra los derechos fundamentales de la comunidad del municipio de Mapiripán.
2. A las autoridades civiles y a la Fuerza Pública implementar acciones para evitar la presencia e influencia de grupos armados ilegales sobre estas veredas y corregimientos con el fin de que se garanticen la vida, integridad física, libertad personal, bienes y servicios de que disponen las comunidades rurales de los municipios de Mapiripán, Puerto Concordia y San José del Guaviare.
3. Orientar a las autoridades departamentales, municipales y a la Agencia Presidencial para la Acción Social para que diseñen una estrategia de prevención para el desplazamiento forzado, se actualice el registro de desplazados y estén atentos desde los Comités de Atención Integral para la Población Desplazada por la Violencia para atender los posibles desplazamientos que se presenten y el acompañamiento a las comunidades en riesgo.
4. A la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, las Gobernaciones del Meta y Guaviare y las administraciones municipales de Mapiripán, Puerto Concordia y San José del Guaviare para que desarrollen programas de prevención y protección en materia de salud, educación y saneamiento básico. Igualmente, orientar y capacitar a funcionarios en la atención diferenciada en salud y etnoeducación para las comunidades indígenas, así como capacitar y orientar a las comunidades de los resguardos indígenas en la construcción de sus *Planes de Vida*. Desarrollar programas que eviten la vinculación de los miembros de los pueblos indígenas a grupos armados ilegales y a las actividades de explotación cocaínera (recolectores de hoja de coca y actividades relacionadas con la transformación de cocaína). Así mismo, a la Fuerza Pública, Ejército y Policía Nacional, en la medida en que desarrollen operativos militares, tener en cuenta el cumplimiento de la Directiva No. 16 de 2006 y el Instructivo No. 30313 de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, respecto al Territorio, a la Autonomía y a la Cultura de los pueblos indígenas que existen en jurisdicción de estos municipios.
5. A las autoridades civiles y de Fuerza Pública del nivel nacional, departamental y local, garantizar el libre y autónomo ejercicio de los derechos políticos de la población en el marco de los próximos comicios electorales del mes de octubre de 2007, ante la probabilidad de ocurrencia de acciones de constreñimiento electoral, amenazas e intimidaciones o presiones para que no voten o inclinar su voluntad de escogencia por determinada opción política o candidato, que realicen los grupos armados irregulares.
6. A las autoridades civiles (Gobernaciones del Meta y Guaviare y las Alcaldías y Personerías de Puerto Concordia, Mapiripán y San José del Guaviare), la Vicepresidencia de la República y la Agencia Presidencial para la Acción Social, para que promuevan acciones de coordinación interinstitucional con las comunidades en el sentido de elaborar un plan de prevención integral del desplazamiento forzado, concertado con las comunidades y que convoquen a los Organismos Internacionales y Nacionales de Derechos Humanos presentes en la zona.

7. A las Gobernaciones del Meta y Guaviare, el Ministerio del Interior y de Justicia, al Ministerio de Transporte, al INCODER y la Dirección Nacional de Estupefacientes para que coordinen con las autoridades territoriales competentes las medidas urgentes y necesarias para erradicar la siembra de cultivos de uso ilícito, promuevan e implementen programas de desarrollo social y económico viables a través de proyectos productivos para la sustitución de cultivos ilícitos, en donde se garanticen los derechos de propiedad sobre la tierra de las comunidades campesinas y los resguardos indígenas, la asistencia técnica, el mejoramiento de la infraestructura productiva y la comercialización de la producción agrícola que propendan por mejorar el bienestar de la población.
8. A las Gobernaciones del Meta y Guaviare, a las Alcaldías de Puerto Concordia, Mapiripán y San José del Guaviare, a la Agencia Presidencial para la Acción Social y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que promuevan la ampliación e implementación de programas psicosociales y de apoyo nutricional acordes con la cultura y costumbres de las comunidades de indígenas y colonos respectivamente.
9. A las Gobernaciones del Meta y Guaviare, a las Alcaldías de Puerto Concordia, Mapiripán y San José del Guaviare y a las Corporaciones Autónomas Regionales de Meta y Guaviare, tomar las medidas correspondientes a fin de garantizar la preservación del hábitat natural de las comunidades indígenas que se encuentran traslapados con Parques Nacionales Naturales.
10. A la Oficina de la MAPP/OEA se le informe sobre las acciones de las nuevas estructuras de origen paramilitar para que en cumplimiento de su mandato verifique el cumplimiento de los acuerdos entre las AUC y el Gobierno Nacional. Asimismo se ponga en conocimiento de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de las Personas y Grupos Alzados en Armas, para que haga seguimiento a las actividades de los desmovilizados y se adopten medidas para el cumplimiento de los beneficios y compromisos adquiridos con los que depusieron las armas.
11. La Defensoría del Pueblo ha advertido que en los territorios de disputa, entre los grupos armados ilegales, no copados permanentemente por la autoridad y ante eventuales retiradas de uno u otro actor, se deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de la población civil.

NUEVA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

De acuerdo al seguimiento realizado por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo al Informe de Riesgo N° 027 de 2007 se observa que en la zona rural y urbana de los municipios San José (Guaviare), Mapiripán y Puerto Concordia (Meta) persisten los escenarios de riesgo advertidos, pese a las acciones implementadas por las autoridades para mitigarlos.

Las situaciones de riesgo que permanecen en el territorio mencionado, obedecerían a los siguientes factores:

1) El progresivo afianzamiento de la estructura paramilitar de los autodenominados “Cuchillos” en los departamentos de Meta, Guaviare y Vichada con el propósito de cortar o arrebatarle a la guerrilla de las FARC los circuitos económicos y el capital social y, ocupar territorios estratégicos para el tráfico de armas, insumos y derivados de la producción cocaínera. De esta forma los autodenominados “Cuchillos” han venido ampliando su presencia en las áreas rurales de los municipios de Mapiripán, San José del Guaviare y Puerto Concordia, éste último considerado un área estratégica de movilidad y están copando los territorios que fueran de influencia de las FARC en el oriente de Mapiripán, en los corregimientos como Puerto Alvira y Caño Jabón e igualmente el sector conocido por la comunidad como “Trocha Ganadera”, en sectores cercanos a la cabecera de San José del Guaviare.

La estructura paramilitar de los autodenominados “Cuchillos” en las zonas rurales de Mapiripán (Meta), Puerto Alvira, en el sector de Caño Jabón, y también en las veredas San Andrés, California, La Horqueta, La Libertad, Guacamayas, El Mielón, El Triunfo y El Trin, y San José (Guaviare), en el sector de la trocha Ganadera, sobre la margen derecha del río Guaviare en dirección a Barranco Colorado, sobre el eje que comunica a las veredas El Morro, Charras, Churrasquera, Puerto Nare, Caño Danta, Caño Rojo, Caño Makú y Guanapalo pretende controlar la cuenca del río Guaviare, para lo cual se encaminan hacia el centro poblado de Puerto Alvira (sobre la margen izquierda del río), copando territorios que estuvieron bajo el dominio de las FARC. La presencia de los denominados “puntos” (personas que cumplen labores de inteligencia y comunicaciones) del grupo de los “Cuchillos” en las cabeceras municipales y en los corredores viales que comunican a Puerto Concordia con Mapiripán y a San José con El Retorno y Calamar se ha hecho más notoria debido al interés de intervenir el comercio de la coca y la pretensión de influir en las actividades comerciales lícitas.

Es importante considerar que el trasegar violento que ha acompañado las estructuras paramilitares en los departamentos Meta y Guaviare (masacres de Mapiripán y Puerto Alvira) en la historia reciente del país, hace temer que su avanzada se traduzca en una espiral de violencia y ataques en contra de la población civil con posibles violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH.

2) Las FARC mantienen una estrategia de contención de la Fuerza Pública y de las estructuras paramilitares, desatando acciones violentas contra indígenas, colonos y campesinos, además de los ataques que han proferido contra líderes comunales y profesores. Estos hechos de violencia han afectado principalmente a las comunidades ribereñas del río Guaviare y a las ubicadas en el extremo oriental (especialmente en las veredas Esteros Altos y Bajos, la inspección de la Cooperativa, La Jungla, El Rincón del Indio, y sobre la cuenca del río Guaviare en Puerto Alvira) que limita con el municipio de Cumaribo (Vichada). En la zona contigua y al interior del Resguardo y Parque Nacional Natural Nukak Makú, en el municipio de San José, la guerrilla también ha incrementado las presiones en contra de los indígenas Nukak Makú, coaccionando y limitando su movilidad, afectando sustancialmente su supervivencia.

Es importante destacar que al no ser zonas de permanente presencia de la Fuerza Pública, donde las operaciones son periódicas, con el ingreso y posterior salida de los contingentes militares se generan retaliaciones en contra de la población civil, que es señalada por la guerrilla como

"colaboradora" e "informante", convirtiéndola en objetivo militar, además, se dispara la siembra indiscriminada de minas antipersonal, como ha ocurrido en sectores y caminos cercanos a los internados de Mocuare y Barranco Ceiba (San José del Guaviare), donde han empezado a ocurrir accidentes mortales por estos artefactos explosivos. De otro lado, aunque más esporádica, la entrada y salida de milicianos de las FARC a las cabeceras municipales se constituye en otro factor de riesgo.

Nuevamente se han cernido amenazas de ataque armado por parte de las FARC contra varias poblaciones, tal y como advirtieron autoridades civiles de los municipios de Puerto Concordia, Mapiripán y Puerto Rico en el Consejo de Seguridad realizado en la ciudad de Villavicencio, con la presencia de autoridades civiles y militares del nivel nacional, el pasado 28 de septiembre, quienes prevén se desaten acciones violentas indiscriminadas en estos poblados. Igualmente, se teme ante la llegada del Ejército Nacional a Puerto Alvira (Mapiripán), se produzcan hostigamientos o ataques indiscriminados de las FARC contra el municipio en el que podría resultar afectada la población civil,

Pese a los esfuerzos realizados por distintas instancias del Estado, y como consecuencia de la dinámica armada anteriormente expuesta, se han extendido los efectos del conflicto armado interno desde la emisión del Informe de Riesgo N° 027-07, como lo indica lo siguientes hechos:

El 9 de octubre de 2007, fue asesinado en un sector aledaño a Puerto Alvira (Mapiripán), al parecer por las FARC, una persona reconocida en el gremio transportador, luego de ser señalada por el grupo guerrillero como informante del Ejército.

El 21 de octubre de 2007, fue asesinado presuntamente por el Frente 44 de las FARC el señor Luis Fernando Gómez, profesor del internado del sector de Mocuare en San José del Guaviare, tras ser señalado por el grupo guerrillero de ser informante del Ejército, lo que generó el desplazamiento forzado de los promotores de salud y de los profesores de esta zona.

El 7 de diciembre de 2007, se presentaron enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla de las FARC en el sector de la Cooperativa (Mapiripán) que produjo desplazamientos de familias que habitaban en la zona.

El 2 de enero de 2008, fue asesinado presuntamente por las FARC el líder indígena de la comunidad Nukak Makú, Monikaro Nukak, en el sector de Mocuare, jurisdicción de San José del Guaviare.

El 6 de febrero de 2008, ante el temor de los pobladores de quedar en medio de una confrontación abierta entre la Fuerza Pública y las FARC en el sector de Tomachipán (San José del Guaviare), se produjo el desplazamiento masivo de 105 personas, integrantes de 29 familias, hacia la cabecera municipal de San José del Guaviare.

El 17 de febrero de 2008, los anuncios de una posible incursión contra Puerto Alvira por parte de un grupo paramilitar conocido como los "Cuchillos", atemorizan y genera zozobra en la población civil.

El 29 de febrero de 2008, como consecuencia de las amenazas proferidas por grupos paramilitares al mando de Pedro Oliverio Guerrero “Cuchillo” en contra de los pobladores de Puerto Alvira, municipio de Mapiripán, sobre posible una incursión armada en el corregimiento y ante las presiones, exacciones y coacciones del Frente 44 de las FARC, que mantiene influencia en este territorio, se desplazan aproximadamente 100 pobladores del lugar, quienes se dirigieron fundamentalmente hacia Villavicencio y hacia los corregimientos ubicados al oriente por el río Guaviare.

El 1 de marzo de 2008, fueron proferidas amenazas en el sector del Charras (San José del Guaviare), al parecer por integrantes del grupo armado de “Los Cuchillos”, quienes intimidaron a los pobladores señalándolos como colaboradores de las FARC.

El 5 de marzo de 2008, producto de las presiones de los grupos armados llegan a la cabecera de Mapiripán seis indígenas de la etnia Guayabero, desplazados de Barranco Ceiba (Mapiripán) y advierten sobre un desplazamiento masivo de este sector.

El 9 de marzo de 2008, se produce un desplazamiento masivo de 86 indígenas provenientes de los sectores Barranco Ceiba, Laguna Barajas y Laguna Araguato (Mapiripán) quienes llegan a la cabecera municipal de Mapiripán.

El 18 de junio de 2008, fueron heridos dos comerciantes con tiros de fusil en hechos ocurridos en un sector que conduce de la cabecera de Mapiripán a la vereda Rincón del Indio, luego de ser interceptados en un reten ilegal del Frente 39 de las FARC.

El 19 de julio de 2008, fue asesinado el indígena de la etnia Guayabero Israel González, en el sector de Barranco Colorado, San José del Guaviare, lo que genera temor en la comunidad Guayabero y la posibilidad de un desplazamiento masivo hacia Mapiripán.

El 22 de julio de 2008, se desplazan masivamente a la cabecera de Mapiripán, por el asesinato del indígena Israel González cerca de 32 personas integrantes de siete familias desde el sector de Barranco Colorado (Guaviare), igualmente se desplazan masivamente 52 personas integrantes de 11 familias desde el sector de Barranco Ceiba, todos integrantes de la etnia Guayabero.

El 17 de agosto de 2008, fueron asesinados en la cabecera municipal de San José del Guaviare el señor John Franklin Negrelli, funcionario de la Gobernación del Guaviare, y el menor John Gómez de 12 años de edad.

El 28 de septiembre de 2008, murió en el camino que conduce del sector de Barranco Ceiba a la cabecera municipal una joven indígena de 16 años y su bebe de nueve meses tras pisar una mina antipersonal sembrada por la guerrilla de las FARC.

Igualmente, las acciones de los grupos armados ilegales, particularmente las FARC, ha producido asesinatos selectivos y desplazamientos sistemáticos de la comunidad indígena Guayabero. En lo corrido del año se han desplazado más de 176 integrantes de esta etnia solamente hacia la

cabecera de Mapiripán. Además, se han presentado desplazamientos de familias y personas de la comunidad Guayabero, que no son registrados por las autoridades civiles, hacia resguardos de municipios cercanos, cuyos efectos se ha hecho sentir en resguardos como Caño La Sal, en Puerto Concordia, y Barrancón, en San José del Guaviare. El recrudecimiento de las acciones armadas en el territorio mencionado podría provocar un desplazamiento masivo de colonos e indígenas asentados en las veredas situadas sobre la ribera del río Guaviare, quienes se dirigirían a las cabeceras de Mapiripán y San José, municipios que en la actualidad no cuentan con los recursos y la infraestructura para atender una crisis humanitaria de este tipo.

El repliegue de los frentes 1, 7, 39 y 44 de las FARC ha llevado al fraccionamiento de sus frentes y una actuación cada vez más dispersa, obligando al grupo guerrillero a endurecer las restricciones, las amenazas y a incrementar los homicidios selectivos y los desplazamientos forzados, este fortalecimiento de la autonomía de las pequeñas cuadrillas de la guerrilla es la opción que se está imponiendo para operar sin depender del Frente, razón por la que se presentan acciones violentas contra la población civil de manera dispersa de las cuales no tienen conocimiento las autoridades.

Es posible además, que ante los operativos desplegados por la Fuerza Pública que han dado cuenta del rescate de secuestrados y la baja de mandos reconocidos al interior de la guerrilla, se presenten retaliaciones y actos de terrorismo que puedan afectar a la población civil en las zonas de riesgo descritas. Además, las operaciones militares contra la guerrilla han generado enfrentamientos y bombardeos que han provocado el desplazamiento de la población civil que huye de sus territorios por el temor de quedar en medio de los enfrentamientos armados, como sucedió en sectores aledaños a las veredas y corregimientos Mata Bambú (21 de octubre de 2007), La Cooperativa (7 de diciembre de 2007) en el departamento del Meta y Tomachipán (06 de febrero de 2008) en el departamento del Guaviare, caso último que produjo el desplazamiento de 105 personas hacia la cabecera de San José.

Es preciso indicar, que no obstante las medidas implementadas por las autoridades del orden nacional, regional y local, estas no han sido suficientes para reducir las condiciones de vulnerabilidad y de los factores de riesgo de las comunidades que se ven expuestas a la acción violenta de los grupos armados. La dependencia de las comunidades rurales al cultivo y comercialización de la coca, y la ausencia de alternativas de sustitución que las incorporen de manera real y eficaz a economías y mercados legales del nivel local y regional, han incrementado notablemente su nivel de vulnerabilidad.

Las comunidades también han manifestado su inconformismo con las fumigaciones aéreas que al parecer causan afectaciones en la salud de las personas, los suelos, las fuentes hídricas y los cultivos de pancoger que han reemplazado los cultivos de uso ilícito, por lo que de no adoptarse medidas preventivas podría producir problemas de seguridad alimentaria, no solamente en San José del Guaviare y Mapiripán, sino también en los municipios donde no se han implementado programas de sustitución de cultivos de uso ilícitos, afectando con mayor rigor a los niños, niñas, ancianos y mujeres gestantes y lactantes.

Las comunidades indígenas Guayabero y Nukak Makú, están sufriendo en gran manera la ausencia de políticas públicas y programas de atención diferenciada en materia de salud, etnoeducación y seguridad alimentaria. De continuar esta crítica situación se podría desencadenar un proceso de aculturación irreversible que los lleve a la extinción de sus tradiciones y su cultura, transgrediendo considerablemente sus derechos fundamentales.

En lo concerniente a dicho impacto respecto del pueblo indígena Nukak, varias comunidades (grupos o “bandas”) se han visto sometidas al confinamiento en su territorio ancestral especialmente en las zonas de Caño Seco, Caño Makú, Cueva Loca y Caño Araguato, lo que ha afectado notablemente a las familias de esta etnia nómada, que han visto restringidas sus tradiciones de caza, pesca y recolección, circunstancia que ha representado una alteración significativa de su dieta alimentaria, y con ello una afectación de su supervivencia. Esta circunstancia no es nueva, hay que tener en cuenta que el desplazamiento de esta etnia ha sido reiterativo. De continuar el sometimiento y la coacción por parte de este grupo armado, es probable que se generen nuevos desplazamientos masivos de indígenas y de colonos hacia el casco urbano de San José del Guaviare.

Esta dinámica de violencia contra los indígenas ha afectado también a la etnia Guayabero, que durante los últimos años ha soportado el asesinato y amenazas de algunos líderes de su comunidad ante la negativa de someterse a imposiciones de control social, la siembra de coca y el reclutamiento ilícito y forzado. En los resguardos de Barranco Colorado y Corocoro (Curripaco) se han presentado presiones a líderes e integrantes de la comunidad para el reclutamiento ilícito y forzado, incluso en Barranco Colorado han sucedido reclutamientos de jóvenes de la comunidad; estos mismos resguardos por presiones de las FARC han sido sometidos a confinamiento y a restricciones para su movilidad, situaciones que ha afectado especialmente a docentes de la zona.

Bajo este crítico panorama, la disputa que se libra entre los actores armados en el territorio comprendido por los municipios de Mapiripán, Puerto Concordia y San José del Guaviare, mantiene un alto nivel de riesgo para la población civil, especialmente para la población indígena Guayabero y Nukak Makú, que de continuar puede traducirse en atentados contra la vida, la libertad y la integridad física de los habitantes del municipio de Cumaribo, afectación como consecuencia de acciones bélicas (ataque indiscriminado - accidentes por minas antipersonal, armas trampa y MUSE - enfrentamientos con interposición de población civil), utilización de métodos para generar terror e intimidación en la población civil, homicidios selectivos y múltiples, destrucción de bienes civiles, desplazamientos forzados, reclutamientos forzados, entre otros, que afecten de manera sustantiva y desproporcionada a mujeres campesinas, colonos e indígenas.

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por el desarrollo de la reunión *descentralizada* del CIAT en la ciudad de Granada (Meta) el 15 de julio de 2008, con asistencia de las autoridades del orden departamental y delegados del CIAT, donde se decidió mantener la Alerta Temprana por tres meses a partir de esta fecha para los municipios focalizados por el Informe de Riesgo N° 027-07, aún cuando la Defensoría del Pueblo no ha sido notificada de manera formal acerca de dicha decisión, la presente nota de seguimiento, da cuenta de la grave situación que afronta la población

civil y reitera la advertencia, solicitando al CIAT mantener la Alerta Temprana para los municipios de Mapiripán, Puerto Concordia y San José del Guaviare.

RECOMENDACIONES

Ante la prevalencia del riesgo, y previo estudio de la presente Nota, se solicita al CIAT declarar la Alerta Temprana y reiterar a las autoridades la adopción de medidas efectivas que permitan conjurar, mitigar o controlar la situación de riesgo descrita, con el fin de proteger la población civil y brindar la atención humanitaria si así fuese el caso.

1. A la Policía Nacional y Ejército Nacional, acantonado en el departamento del Meta y Guaviare, adoptar medidas eficaces de control para prevenir una eventual incursión o ataque de grupos armados ilegales que atenten contra los derechos fundamentales de las comunidades rurales de los municipios de Mapiripán, Puerto Concordia y San José del Guaviare, basados en las doctrinas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Igualmente, tomar medidas urgentes en materia de investigación y sanción por actos y hechos violatorios de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario atribuibles a miembros de la Fuerza Pública que operan en la zona.
2. Recomendar a la Gobernación del Meta y Guaviare y a la Fuerza Pública implementar acciones para evitar la presencia e influencia de grupos armados ilegales sobre estas veredas y corregimientos con el fin de que se garanticen la vida, integridad física, libertad personal, bienes y servicios de que disponen las comunidades rurales de los municipios de Mapiripán, Puerto Concordia y San José del Guaviare.
3. Orientar a los Gobernadores del Meta y Guaviare, a los Alcaldes Municipales de Mapiripán, Puerto Concordia y San José del Guaviare, y a la Agencia Presidencial para la Acción Social para que diseñen una estrategia de prevención para el desplazamiento forzado y estén atentos desde los Comités de Atención Integral para la Población Desplazada por la Violencia de los municipios de Mapiripán, Puerto Concordia y San José del Guaviare, para atender los posibles desplazamientos que se presenten y el acompañamiento a las comunidades en riesgo.
4. A la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, las Gobernaciones del Meta y Guaviare, y las administraciones municipales de Mapiripán, Puerto Concordia y San José del Guaviare, para que desarrollen programas de prevención y protección en materia de salud, educación y saneamiento básico, así como el desarrollo de programas que eviten la vinculación de los miembros de los pueblos indígenas a grupos armados ilegales y a las actividades de explotación cocaínera (recolectores de hoja de coca y actividades relacionadas con la transformación de cocaína). Así mismo, a la Fuerza Pública, Ejército y Policía Nacional, en la medida en que desarrollen operativos militares, tener en cuenta el cumplimiento de la Directiva No. 16 de 2006 y el Instructivo No. 30313 de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, respecto al Territorio, a la Autonomía y a la Cultura de los pueblos indígenas que existen en jurisdicción de estos municipios.

5. A las autoridades civiles, Gobernaciones del Meta y Guaviare, Alcaldías y Personerías de Mapiripán, Puerto Concordia y San José del Guaviare, a la Vicepresidencia de la República y la Agencia Presidencial para la Acción Social, para que promuevan acciones de coordinación interinstitucional con las comunidades en el sentido de elaborar un plan de prevención integral concertado con las comunidades y que convoquen a los Organismos Internacionales y Nacionales de Derechos Humanos presentes en la zona a fin de promover programas para la difusión, el respeto y realización de los Derechos Humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.
6. A las autoridades civiles, Gobernaciones del Meta y Guaviare, Alcaldías y Personerías de Mapiripán, Puerto Concordia y San José del Guaviare, a la Vicepresidencia de la República y la Agencia Presidencial para la Acción Social, para que promuevan acciones de coordinación interinstitucional con las comunidades, a fin de promover programas y proyectos dirigidos a mejorar las condiciones de vida y dignidad de las comunidades, y consecuentemente disminuir las condiciones de vulnerabilidad que facilitan su exposición a la actuación de los actores armados.
7. A las autoridades civiles, Gobernaciones del Meta y Guaviare, Alcaldía y Personerías de Mapiripán, Puerto Concordia y San José del Guaviare, a la Vicepresidencia de la República y la Agencia Presidencial para la Acción Social, para que promuevan acciones de coordinación interinstitucional con las comunidades a fin de implementar acciones de reconocimiento y apoyo a procesos organizativos comunitarios, brindar garantías para el ejercicio y fortalecimiento de las comunidades, desarrollar programas de capacitación que promuevan el empoderamiento de las comunidades y desarrollar acciones de solidaridad social con las comunidades afectadas.
8. A las Gobernaciones del Meta y Guaviare, al Ministerio del Interior y de Justicia, al INCODER y la Dirección Nacional de Estupefacentes para que coordinen con las autoridades territoriales competentes las medidas urgentes y necesarias para erradicar la siembra de cultivos de uso ilícito, promuevan e implementen programas de desarrollo social y económico viables a través de proyectos productivos para la sustitución de cultivos de uso ilícito, en donde se garanticen los derechos de propiedad sobre la tierra, la asistencia técnica, el mejoramiento de la infraestructura productiva y la comercialización de la producción agrícola que propendan por mejorar el bienestar de la población.
9. Al Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, coordinar con la Fuerza Pública, las acciones y medidas efectivas para la remoción de minas y restos explosivos de guerra (REG). En sentido amplio, esta actividad incluye la realización de estudios, el trazado de mapas, la señalización de los campos minados, el desminado humanitario y la remoción de explosivos sin detonar. La remoción de minas es esencial para que las comunidades puedan volver a utilizar plenamente sus tierras.
10. A la Oficina de la MAPP/OEA se le informe sobre las acciones de las nuevas estructuras de origen paramilitar para que en cumplimiento de su mandato verifique el cumplimiento de los acuerdos entre las AUC y el Gobierno Nacional.

11. A la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de las Personas y Grupos Alzados en Armas, para que haga seguimiento a las actividades de los desmovilizados y se adopten medidas para el cumplimiento de los beneficios y compromisos adquiridos con los que depusieron las armas.
12. A la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de la Vicepresidencia de la República, en cabeza del programa Colombia Joven, encargada de articular y orientar la ejecución de las acciones para prevenir el reclutamiento o utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos armados al margen de la ley, para que realice las acciones de coordinación necesarias para promover la garantía y cumplimiento de los derechos de la infancia en riesgo de reclutamiento y la ejecución de políticas públicas de protección integral y fortalecimiento institucional, social y familiar que permita reducir los factores de riesgo de reclutamiento o utilización de esta población en los municipios objeto de este informe.

JORGE ENRIQUE CALERO CHACON

Defensor Delegado para la Evaluación de Riesgos de la
Población Civil Como Consecuencia del Conflicto Armado